



Cambio climático, desarrollo sostenible y gobernanza ambiental. Retos de la integración Latinoamericana-Caribeña

Antonio De Lisio

Panorámica del cambio climático en la región

Como un aspecto sustantivo de la situación de la región emerge el riesgo climático. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (más conocido como IPCC en sus siglas en inglés) establece que los eventos climáticos extremos han aumentado en la región 2,4 veces entre 2000 y 2005, respecto al periodo 1970-1999 (IPCC, 2007), con

consecuencias importantes en las economías nacionales: durante los primeros cinco años del siglo XXI ocasionaron pérdidas económicas equivalentes 20 mil millones dólares estadounidenses, convirtiéndose por lo tanto en un problema de desarrollo a resolver. Las impactos sobre la economía entre 1970 y 2008 suman una pérdida mayor a los ochenta mil millones de dólares (Cuadro N° 1).

Cuadro N° 1
América Latina y El Caribe: pérdidas acumuladas por concepto de fenómenos hidrometeorológicos, 1970-2008

Tipo de fenómeno	Pérdidas (millones USD)
Tormenta	42 374
Inundación	26 358
Sequía	8 698
Deslizamiento	2 006
Temperaturas extremas	1 179
Incendio forestal	817
	81 435 (Total)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de “EM-DAT: Emergency Events Database” [base de datos en línea] <http://www.em-dat.net> (Tomado de Samaniego, 2009:32).

Pronóstico de los impactos socio-económicos de los escenarios de cambio climático en América Latina y El Caribe

El Panel Intergubernamental para el cambio climático ha identificado un conjunto de combinaciones posibles mundiales para el cambio climático; para la región son particularmente ilustrativos los identificados como: A1, A2, A1B, A1FI, A1T, B1, B2, y que a continuación se explican:

- A1: Rápido crecimiento demográfico y económico y la adopción de tecnologías nuevas y más eficientes.

- A2: Menor dinamismo económico y globalización. Crecimiento demográfico alto y sostenido.
- A1B: Equilibrio en el uso de todo tipo de fuentes.
- A1F1: Predominio de combustibles fósiles.
- A1T: Desplazamiento y predominio de la energía de origen no fósil;
- B1: Mitigación parcial de las emisiones por el uso más eficiente de la energía y mejoras tecnológicas.
- B2: La mitigación se logra por soluciones mejor localizadas.

Se debe enfatizar que el Panel pronostica sobre la base de una combinación de estos escenarios, considerando la proyección de las situaciones problemáticas. Así, por ejemplo, para América Latina y el Caribe, suponiendo un crecimiento uniforme de la población, si mejoran las defensas costeras debido al perfeccionamiento de las medidas de adaptación en el marco del escenario B2, no habría víctimas aún si en términos energéticos existe el predominio de la energía fósil prevista en el escenario A1F1. Esta medida preventiva tiene un especial significado si se considera que de no tomarse ésta y si se mantiene el patrón energético fósil al 2080, podríamos estar asistiendo a situaciones realmente dramáticas con posibilidades de hasta 3 millones de afectados anuales por inundación en ALyC (IPCC, 2007; Samaniego, 2009).

Los pronósticos y sus efectos a nivel subregional

Para facilitar este análisis a continuación se muestra el cuadro con las principales proyecciones de temperatura y precipitación para los distintos ámbitos geográficos de interés.

Cuadro N° 2
Proyecciones de temperatura y precipitaciones AL y C

Ámbito geográfico / Época del año	2020	2050	2080
Cambios de la temperatura (oC)			
Mesoamérica			
Estación seca	+0,4 a +1,1	+1,1 a +3,0	+1,0 a +5,0
Estación húmeda	+0,5 a +1,7	+1,0 a +4,0	+1,3 a +6,6
Amazonía			
Estación seca	+0,7 a +1,8	+1,0 a +4,0	+1,8 a +7,5
Estación húmeda	+0,5 a +1,5	+1,0 a +4,0	+1,6 a +6,0
América del Sur			
Invierno (JJA)	+0,6 a +1,1	+1,0 a +2,9	+1,8 a +4,5
Verano (DEF)	+0,8 a +1,2	+1,0 a +3,0	+1,8 a +4,5
Cambios del nivel de precipitaciones (porcentajes)			
Mesoamérica			
Estación seca	-7 a +7	-12 a +5	-20 a +8
Estación húmeda	-10 a +4	-15 a +3	-30 a +5
Amazonía			
Estación seca	-10 a +4	-20 a +10	-40 a +10
Estación húmeda	-3 a +6	-5 a +10	-10 a +10
América del Sur			
Invierno (JJA)	-5 a +3	-12 a +10	-12 a +12
Verano (DEF)	-3 a +5	-5a +10	-10 a +10

Fuente: IPCC, 2007. Notas: DEF=diciembre, enero y febrero; JJA=junio, julio y agosto.

En el marco de estos pronósticos se vislumbran los siguientes impactos subregionales:

Gran Caribe

La situación geográfica de los países centroamericanos y los pequeños estados insulares determina su alta vulnerabilidad frente a las consecuencias de cambio climático. Su situación entre los Océanos Atlántico y Pacífico, los hace susceptibles a los fenómenos climáticos

extremos como los huracanes, las lluvias intensas, las sequías. De materializarse el pronóstico de un aumento de temperatura entre 1 y 2°C regional y el incremento del nivel del mar afectaría la productividad de los ecosistemas costeros y marinos, incidiendo en la seguridad alimentaria al afectar la distribución y disponibilidad de los recursos pesqueros. De manera similar, aumentan los riesgos en la disponibilidad de agua para el consumo humano al incrementarse las probabilidades de salinización de los acuíferos (López, 2009).

Contrariamente, las áreas insulares y continentales ubicadas en posición de sotavento se verían afectadas, entre otros eventos, por sequías, desertificación, cambios de patrones de lluvias, afectando significativamente la actividad agrícola y por lo tanto las disponibilidades locales de alimentos. El aumento de la amenaza climática se potencia ante los factores sociales que gravitan sobre la vulnerabilidad regional: la presión demográfica, déficit de gestión territorial, la dependencia manifiesta a la hidroelectricidad, el círculo vicioso pobreza-presión sobre los recursos naturales (Europa AID, 2009).

Andes

En los últimos treinta años en los Andes Centrales se han registrado aumentos de temperaturas por encima del promedio mundial, siendo la causa principal del grave problema de retrocesos y desaparición de los glaciares, fuentes principales de suministro de agua y de electricidad de muchas ciudades andinas. La alteración de los caudales afectaría el acceso a fuentes de agua para consumo humano, hasta en capitales como Lima y La Paz. En general los ecosistemas de montaña, páramos, humedales de altura, bosques nublados, han aumentado su vulnerabilidad a los eventos extremos lluvia-sequía, con implicaciones graves sobre los sistemas agrícolas de subsistencia, que deben responder al aumento de la alternancia inundación-incendios. Fenómenos como El Niño y La Niña (El Niño Southern Oscillation -ENSO), de especial impacto en la región andina, tienden a aumentar su intensidad y frecuencia, por efecto del cambio climático, incidiendo sobre componentes clave de la seguridad humana tales como: alimentación, movilidad, suministro eléctrico y de agua. Se estima que para el año 2025, los eventos extremos podrían ocasionar en la subregión una pérdida aproximada de 30.000 millones dólares EEUU año, equivalentes al 100% del monto

destinado en la actualidad al sector Salud, y el 80% de lo destinado a la Educación (Llosa, et al 2009).

Amazonas

Los pronósticos destacan los peligros de aumento de sequía, previniéndose la repetición de situaciones similares a las ocurridas en el 2005: aumento de las áreas de sabana y disminución de la capacidad de absorción de carbono en la región, en la que los bosques latifólicos de hojas anchas cumplen el rol preponderante. Se debe resaltar que entre 1970-2007 se redujo la capa forestal en 17,2 millones de Ha. A esto se le debe sumar el incremento en la irregularidad de las precipitaciones dado los pronósticos de una mayor frecuencia de ocurrencia de los fenómenos de El Niño y La Niña. Las formas actuales de agricultura y pesquería podrían verse comprometidas, afectando la seguridad alimentaria de las naciones amazónicas (Europa AID, 2009).

Cono Sur

En el Cono Sur se prevé el retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes debido al efecto del aumento de la temperatura en la disminución del caudal de los ríos y, por ende, en el suministro de agua para el consumo humano en las ciudades y para la irrigación de los valles agrícolas del norte de Argentina y Chile. Se pronostica la intensificación de los procesos de desertificación, que comprometerían la seguridad alimentaria nacional y la capacidad de exportación de estos “graneros” del mundo. En los sectores costeros atlánticos se predice la penetración “aguas arriba” de la cuña de agua salina, propiciando la salinización de tierras y acuíferos. De manera similar, el aumento del nivel del mar afectaría la infraestructura existente, recordando que capitales como Buenos Aires y Montevideo son grandes centros portuarios costeros. Se prevé aquí la reducción de la línea de costa y de la diversidad biológica. En las cuencas interiores, en especial la Cuenca del Plata, la segunda a nivel mundial después de la del río Amazonas, se presume que el aumento del nivel mar podría afectar la desembocadura de los cursos de agua en el océano, potenciando el riesgo de inundación fluvial (Europa AID, 2009).

Las mayores preocupaciones nacionales derivadas de los pronósticos sobre cambio climático

En el marco de las consideraciones subregionales realizadas, a continuación se puntualizan las principales preocupaciones futuras específicas a nivel nacional y/o sub-nacional:

Cuadro N° 3
Pronósticos negativos del cambio climáticos en los países de AL y C

Costas bajo el nivel del mar del Brasil, Colombia, el Ecuador, El Salvador, Guyana y Rep. Bol. de Venezuela	IEEE A2, 38-104 cm	En los ambientes más expuestos y marginales, los manglares podrían desaparecer. En cambio, podrían aumentar su cobertura en los ambientes de alta sedimentación de pleamar y de las cuencas fluviales inundables. La producción de langostinos se verá afectada, con la consiguiente caída del PIB.
El Salvador	ANM de 13-110 cm	Pérdida de tierras que alcanzaría entre un 10% y un 27,6% de la superficie total (141 a 400,7 km ²).
Guyana	ANM de 100 cm, proyectado mediante MCG	Más del 90% de la población y las actividades económicas más importantes están ubicadas en la zona de costa, que se prevé retrocederá hasta 2,5 km.

<p>Arrecifes de coral mesoamericanos y manglares del golfo de México</p>	<p>SST 1°-3°C más cálidas en 2080 según los escenarios IIEE</p>	<p>Se estima que el alza de la temperatura marina afectará los arrecifes de coral y los manglares, menoscabando así la conservación de numerosas especies en peligro tales como las tortugas verdes, las tortugas pico de cuervo y de cabeza grande (usualmente quelonios carnívoros), el manatí de las Indias Occidentales y las especies de cocodrilo americano y de Motelet .</p>
<p>Costa Rica, costa de Punta Arenas</p>	<p>ANM de 0,3 a 1,0 m</p>	<p>El mar podría avanzar de 150 a 500 m en zonas urbanas.</p>
<p>Ecuador (sistema de Guayas, zonas conexas y ciudad de Guayaquil)</p>	<p>Sin cambio LAN 0, moderado LAN 1 y cambios severos LAN 2, con y sin desarrollo económico</p>	<p>Pérdidas por un valor de 1,3 billones de dólares en materia de cultivo de langostinos, manglares, áreas urbanas y de recreación y suministro de agua potable. En cuanto a los cultivos de banano, arroz y caña de azúcar, las pérdidas ascenderían a 1,04 billones. La población evacuada y en riesgo aumentaría a 327.000 y 200.000 personas, respectivamente. Se calcula que un 44% de los actuales 1.214 km² de manglares se verá afectado por el escenario LAN 2.</p>

Perú	Intensificación de los fenómenos ENOS y aumento de la SST, posible ANM	Los ecosistemas marinos y la pesca se verán afectados, entre otros, por la hipoxia y la reducción de las áreas de desove y la pesca de anchoas. La inundación de la infraestructura, viviendas y pesquerías provocará daños avaluados en 168,3 millones de dólares. Las pérdidas globales de las ocho zonas costeras del Perú alcanzarían los 1.000 millones de dólares.
Colombia	ANM de 1,0 m	Inundación permanente de 4.900 km ² de zonas costeras bajas, lo cual afectará a cerca de 1,4 millones de personas; el 29% de los hogares y el 44% de la infraestructura califican de muy vulnerable. En el sector agrícola se estiman pérdidas de tierra por efectos de las inundaciones: por ejemplo, se pronostica la reducción de la frontera agrícola en paradera de 7,2 millones de ha.

<p>Áreas costeras de la Argentina y el Uruguay (oeste de Montevideo), provincias de Buenos Aires y Río Negro</p>	<p>ANM, variabilidad climática, ENOS, oleadas de tormenta (“sudestadas”)</p>	<p>Además de la subsidencia de las costas, hay factores como las “sudestadas” (vientos muy fuertes del sudeste en las costas de Río de la Plata) y los efectos locales de El Niño, que contribuirían a acelerar la elevación del nivel del mar. Esto provocaría el incremento de impactos socio-ambientales en las costas de la Argentina y el Uruguay en las próximas décadas, tales como erosión costera e inundaciones. Las zonas más bajas (pantanos y playas de arena de abundante biodiversidad) serán muy vulnerables al aumento del nivel del mar y a las oleadas de tormenta. La pérdida de tierras afectaría en forma significativa a la industria turística, que representa el 3,8% del PIB del Uruguay.</p>
<p>Argentina (ciudad de Buenos Aires)</p>	<p>Oleadas de tormenta y ANM 2070-2080</p>	<p>Las medidas de adaptación tomadas ante las actuales condiciones de oleadas de tormenta permiten vislumbrar que los efectos sociales de futuras inundaciones permanentes serían relativamente poco significativos.</p>

Fuente: Samaniego 2009. Notas: ANM = aumento del nivel del mar; ENOS = El Niño Oscilación Sur; IEEEE = Informe especial del IPCC sobre escenarios de emisiones; MCG = modelo de circulación general; SST = temperaturas de la superficie marina.

El compromiso de los países suramericanos por el desarrollo alternativo sostenible: ¿Avances o retrocesos?

Desde los orígenes de la CEPAL, en América Latina se ha venido debatiendo sobre el desarrollo. Importantes exponentes del pensamiento político-social latinoamericano como Prebisch o Furtado, entre tantos otros, se dieron a la tarea de demostrar el carácter estructural del subdesarrollo latinoamericano. Atendiendo a estas orientaciones, entre los años 50s y 70s, los gobiernos centrales intentaron asumir la intervención y el control en aspectos clave para lograr proyectos nacionales de desarrollo de corte reformista que los colocaban entre la producción, la sociedad y el mercado (De Lisio, 2014). Estas experiencias generaron cuestionamientos tanto desde la izquierda marxista, con sus posiciones más críticas, como la teoría de la dependencia y la derecha desarrollista, que tuvieron que esperar hasta los años 80s para potenciarse con el neoliberalismo.

Posteriormente, en 1992 con la celebración de la 2º Cumbre Mundial de Desarrollo y Medio ambiente en Río de Janeiro, los países suramericanos, junto a los restantes latinoamericanos, aprovechando las ventajas de Brasil como sede del evento, presentaron un documento conjunto, Nuestra Propia Agenda, de carácter técnico-político, que trató de plasmar una visión regional sobre la relación ambiente y desarrollo. Vale la pena recalcar la especial consideración del tema de pobreza en los países de la región, que si bien se consideraba causada por diferentes factores, se destacaba entre ellos:

“ ... una larga tradición de gobiernos autoritarios insensibles al cambio social, políticas económicas equivocadas que apostaron al crecimiento indefinido sin atender la distribución del ingreso; Estados que se agotan en intervencionismos puntuales quedando sin capacidad para aplicar políticas trascendentes para el mediano y largo plazo; una desfavorable inserción de América Latina (y el Caribe) en la economía mundial y un trato inequitativo por parte de los países desarrollados; el rezago científico-tecnológico, un estilo de desarrollo que no protege nuestro patrimonio de recursos naturales, y un modelo de desarrollo utilizado por las elites latinoamericanas que ha contribuido a la enorme deuda externa de la región” (BID, et al 1992:8).

Se debe recordar que para la época, las políticas ambientales suramericanas se orientaban más a la protección y conservación de la naturaleza y menos a las propuestas de mejora de la calidad de vida de las mayorías nacionales y la puesta en práctica de las respuestas tecnológicas para el manejo ambientalmente adecuado y duradero de los recursos naturales –respetando sus potencialidades y limitaciones bien como circulantes o bien como depósitos energéticos materiales– y el mejoramiento de los ecosistemas degradados. Se aceptaba lo ambiental más como un problema que como una solución.

La situación Suramérica durante estas dos décadas ha cambiado. Así desde el punto de vista de los marcos regulatorios hay acuerdos regionales que plantean la vinculación ambiente e inclusión social y se han aprobado Constituciones Nacionales que incorporan al Desarrollo Sustentable como orientación fundamental. A esto se le suman una serie de leyes nacionales de desarrollo especialmente territorial, que incorporan las dimensiones de alternativa sustentable, y que subsidiariamente potencian planes de desarrollo local a nivel provincias, departamentos, estados e inclusive municipios. Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, en la Cumbre Río+20 realizada en 2012 en Río de Janeiro, los gobiernos suramericanos en esta oportunidad no solo obviaron la presentación de propuesta conjunta alguna, sino que además dieron muestra de estar presos de una visión desarrollista del desarrollo anclado en la economía marrón. Como expresión de la contradicción entre lo que se establece en el marco regulatorio y lo que se hace, a continuación se discute la IIRSA.

La IIRSA: expresión del desarrollismo suramericano

A pesar de los avances formales, en la región no ha habido avances sustanciales para una agenda de desarrollo alternativo. Todo lo contrario, se ha retrocedido si consideramos intentos como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Esta consiste en un conjunto de proyectos dirigidos a la construcción de la infraestructura física, especialmente de represas hidroeléctricas, como las planificadas en el río Madeira, y de vías de transporte terrestre y fluvial, como la Transamazónica Sur, la hidrovía Paraguay-Paraná, que se destacan en una cartera de 31 proyectos estructurantes y 87 proyectos individuales. Sobre todo en el campo del transporte, la idea de la IIRSA

no es nueva, ya que en el distante año 1967, el Hudson Institute publicó “The Long-Range Potential of Latin America: A Year 2000 Ideology”, documento en el que su autor, J. Karlik, proponía el desarrollo de un sistema integrado de transporte para mejorar la conectividad del “corazón” de la América del Sur, para así garantizar la explotación de los ingentes recursos naturales interiores, tanto entonces como ahora, de alta relevancia mundial. Esta propuesta se formuló en uno de los más conspicuos *think tanks* norteamericanos, en una década en la que los gobiernos suramericanos se mostraban decididos a aumentar la ocupación del interior de los países: primero Kubitschek en Brasil con la creación de Brasilia y de la SUDENE, posteriormente Belaúnde Terry, en Perú, con la Carretera Marginal de la Selva, y Paz Estenssoro, en Bolivia, con la construcción de la vialidad entre el altiplano boliviano y Santa Cruz. También fue el decenio de las reformas agrarias en Colombia y Venezuela, procesos en los que se privilegiaron los sistemas de riego y el otorgamiento de fondos, especialmente para intensificar la colonización de Los Llanos de la cuenca del río Orinoco. Dos décadas después, se formula la estrategia nacional brasileña de “Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento” (ENID), asumida como prioridad de la Constitución brasileña de 1988 (Silveira, 2007).

Todas estas acciones estuvieron dirigidas a mantener el modelo primario exportador de los países suramericanos. Hoy, en el seno de UNASUR, se sigue anclado a estas valorizaciones que resaltan la riqueza natural del interior suramericano, sobre todo de cuatro recursos naturales, hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua, que tanto antes como ahora, resultan fundamentales para el comercio mundial. (CEPAL, 2013; UNASUR, 2013). La Iniciativa en el fondo mantiene la idea de territorios-contenedores, de cornucopias de la abundancia, mostrándonos que no hemos superado el síndrome territorial de El Dorado, el mito fundacional colonial que ha venido acompañándonos como una especie de desconcierto sobre la riqueza, el crecimiento, el progreso, el desarrollo, todos esquivos desde hace más de 500 años.

Los reduccionismos ingenieriles de la IIRSA

De acuerdo al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), instancia creada en el seno de UNASUR en 2009

asumiendo el control de la IIRSA, ésta se estructura en los siguientes Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs): Andino, Andino del Sur, Capricornio, Hidrovia Paraguay-Parana, Amazonas, Interoceánico Central, Mercosur-Chile, Peru-Brasil-Bolivia, Del Sur y Escudo Guayanés. En estos se pretenden implantar los proyectos de infraestructura, que a nuestro juicio han sido concebidos con falencias ambientales, sociales y territoriales que limitan las posibilidades para propiciar el desarrollo duradero (De Lisio, 2013a).

En COSIPLAN/Unasur, se maneja el supuesto de que la infraestructura, predominantemente de transporte y energética, se constituye en un factor clave para la integración política y desarrollo suramericano. Los proyectos estarían dirigidos a superar las llamadas “barreras físicas” (un eufemismo que evita hablar de las interrupciones para el flujo de las mercancías), que dificultan el acercamiento de mercados y la apertura de nuevas oportunidades comerciales. Así, formalmente planteada, luce como una propuesta reduccionista, exclusivamente ingenieril, ya que obvia el hecho de que la infraestructura, para su participación en el crecimiento económico, depende de la estructura jerárquica de las regiones, su composición industrial, los niveles de población, la movilidad del capital y el trabajo, entre muchos otros factores (CEADESC, 2011). Entonces, si solo se invirtiera en transporte y energía, dejando los restantes aspectos de lado, resulta imposible lograr meta alguna del desarrollo.

Los impactos ambientales más destacados de los proyectos IIRSA

Entre los impactos ambientales más conocidos de la IIRSA aparece la deforestación propiciada especialmente por la construcción y ampliación de la vialidad. En el cuadro a continuación se muestra a nivel de corredores viales IIRSA la incidencia de la intervención en la cubierta vegetal:

Cuadro N° 4
Coberturas naturales y deforestación (%)
en corredores de transporte vial IIRSA

Corredor	Bosque	Agua	Antes 1990	1990-2000	2000-2005
Corredor Bioceánico. Santa Cruz-Puerto Suárez, Bolivia	52	0	8	11	3
Corredor Norte. Caranavi-Riberalta-Cobija, Norte Bolivia	63	2	4	1	1
Interoceánica Sur. Madre de Dios, Perú	89	1	2	2	2
Selva Central. Oxapampa-Pucallpa y Tingo María, Perú	70	1	16	4	5
Interoceánico Norte. Juanjui-Tarapoto-Yurimaguas, Loreto, Perú	58	1	30	3	5
Interoceánico Norte. El Reposo-Sarameriza, Loreto, Perú	67	1	3	0	1
Putumayo, Ecuador y Colombia	53	1	39	3	3
Ciudad Guayana-Boa Vista, Venezuela y Brasil.	50	0	2	1	0
Arco Norte. Boa Vista-Georgetown, Brasil y Guyana	42	4	20	4	0

Fuente: Conservación Internacional Fundación Amigos del Museo Noel Kempff (2007)

Los datos muestran que los corredores IIRSA se desarrollan en su gran mayoría en áreas con predominancia de formaciones boscosas. El único corredor en el que no se alcanza por lo menos el 50% de cobertura arbórea es el Arco Norte Boa Vista- Georgetown, pero debiéndose advertir que el área muestra la mayor cantidad relativa de cobertura por cuerpos y cursos de agua, el otro componente del medio natural particularmente sensible a los impactos IIRSA.

También se deben diferenciar las distintas situaciones en términos de deforestación previa, antes de la década de 1990. En tal sentido,

contrastan como situaciones extremas, por un lado, el corredor del Putumayo Colombia-Ecuador, Interoceánico Norte. Juanjui-Tarapoto-Yurimaguas, Loreto, Perú, Arco Norte. Boa Vista-Georgetown, Brasil y Guyana y Selva Central. Oxapampa-Pucallpa y Tingo María, Perú, que presentan los mayores valores relativos. Por el otro, con menores niveles de intervención aparecen: Ciudad Guayana-Boa Vista, Venezuela y Brasil., Corredor Bioceánico. Santa Cruz-Puerto Suárez, Bolivia, Corredor Norte. Caranavi-Riberalta-Cobija, Norte Bolivia, Interoceánico Norte. El Reposo-Sarameriza, Loreto, Perú, Interoceánica Sur. Madre de Dios, Perú.

Entre construcción de infraestructura vial y mantenimiento de la cubierta vegetal amazónica se establece una relación inversamente proporcional, ya que la reducción de los costos de transporte se convierte en un incentivo para la deforestación, mientras que contrariamente, mayores costos inhiben las actividades productivas que causan la reducción de la cubierta vegetal. En la medida en que los sitios estén más alejados o sean inaccesibles, los riesgos de deforestación se reducen ya que las dificultades de acceso disminuyen la presión de la expansión de la frontera agrícola y urbana que propician la deforestación (UICN, 2011). El peso de la vialidad en la deforestación se constató en la amazonia brasileña, donde en los años noventa se precisó que el 90% de la afectación de la cubierta vegetal ocurría a 100 km de la nueva vialidad construida (Duruji, 2006).

Finalmente, hay que tener en cuenta el efecto acumulativo de los impactos de la vialidad en el ecosistema amazónico. El Ministerio del Ambiente (MINAM) del Perú en el caso de la Interoceánica Sur, advierte que durante la construcción de la obra los impactos negativos directos serán temporales y moderados, sin embargo, cuando la obra entre en servicio, se presentarán impactos que pudrían ser irreversibles, poniendo en peligro la existencia misma de los ecosistemas y comunidades humanas locales (MINAM, 2009).

Es posible una integración regional alternativa

La IIRSA se convierte en una de las expresiones más acabadas de cómo los gobiernos de la región, más allá de sus diferencias ideológicas, han

coincido en el “consenso de los commodities” (Svampa, 2013), en propiciar un proceso de integración física atendiendo a los valores de mercado, dirigidos especialmente a potenciar el intercambio de bienes y productos de Suramérica con los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico. Especialmente, la Iniciativa está dirigida a facilitar el comercio entre Brasil, país atlántico y la principal economía del continente y la sexta a nivel mundial, con China, la segunda economía mundial y la de mayor crecimiento sostenido en los últimos diez años. La acometida IIRSA pretende lograr un comercio más fluido, precios más bajos, economías de escala, concentraciones empresariales (clústeres), reducción de costos, entre otras. La iniciativa sigue las orientaciones formuladas por los multilaterales Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), que conformaban la Secretaría Técnica original de la misma. En el COSIPLAN de la Unasur, que como dijimos en la actualidad maneja los proyectos IIRSA, no se ha hecho esfuerzo alguno de reorientación (De Lisio, 2013a). Además, como se destacó en el punto anterior, la construcción de infraestructura vial, la intervención más emblemática de la Iniciativa, constituye un factor de perturbación de la cubierta vegetal y, por lo tanto, es un potenciador del cambio climático regional. De tal manera que la IIRSA ha estado de espaldas a las deseconomías que los eventos extremos climáticos han venido produciendo en la región. Por la conceptualización eminentemente economicista del Business as Usual (BAU), los gobiernos que la han venido impulsando, han subestimado las potencialidades regionales de aprovechamiento natural que propician la resiliencia con la adaptación al cambio climático y mayores posibilidades de inclusión social, como las que a continuación se consideran.

Agro-biodiversidad

Se estima que un 35% alimentos de relevancia en la producción mundial provienen del genoma de las especies domesticadas andino-amazónicas. Además se debe destacar la vinculación de la agricultura local al empleo ancestral de tecnologías para el aprovechamiento ambientalmente amigable, como: los andenes, los *waruwaruo* “camellones”, la rotación de cultivos, el control biológicos de plagas y enfermedades de los cultivos, las técnicas de conservación de alimentos

(p.e: papa seca, *charqui*), el empleo de indicadores “naturales” (astronómicos, biológicos, climáticos).

Estas, a las cuales se les puede adicionar los sistemas Quesungual y Lempira centroamericanos, se ven especialmente potenciadas en el marco de mecanismos del comercio internacional alternativo, como el etiquetado sostenible voluntario, que se viene abriendo camino en diversos sectores económicos: la producción de alimentos, manufacturas, farmacopea biológica y otras actividades de punta, de relevancia mundial (De Lisio, 2014).

Energías renovables

En la región las energías renovables representan el 30% del consumo final, participación que quintuplica el 5,7% registrado en los países de la OCDE y exponencialmente superior al 0,7% que se registra en los países petroleros del Medio Oriente. Entre las fuentes alternativas se destaca la hidroenergía que representa aproximadamente un 15% del consumo final, aunque solo se utiliza el 22% del potencial total. Se debe resaltar además que con los 3100 m³ de agua disponible *per cápita* por año la región duplica el promedio mundial (CEPAL, GTZ, 2004), capacidad que permite considerar un óptimo regional para dar respuesta a los pronósticos de un clima más seco. En el escenario internacional, los países que producen utilizando energía hidroeléctrica aprovechada mediante represas de pequeña y media dimensión muestran Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) para favorecer la descarbonización económica que minimizaría los efectos del cambio climático global.

Las restantes fuentes alternativas relevantes en la región (la leña con un 5.8% y los productos de caña con un 4.1%, del consumo final), sin embargo, no muestran un futuro tan promisorio si se considera que están asociadas a problemas como la deforestación y el cambio de uso de la tierra, actividades que mayormente inciden en la responsabilidad de la región en el cambio climático. Las altas emisiones de GEI asociadas a la expansión de la frontera agrícola deforestando el bosque, implicaría la pérdida de secuestro de carbono por más o menos 80 años.

Otras fuentes alternativas de baja incidencia en estas emisiones como la solar, geotermia y la eólica, tienen un desarrollo muy marginal en la región. En cuanto al gas, una fuente de energía que el Convenio Marco ONU de Cambio Climático ha venido promoviendo hace casi veinte años, a pesar de las cifras internacionalmente relevantes de reservas estimadas y comprobadas en Venezuela y Bolivia, la gasificación aún se encuentra en una etapa muy incipiente en la región.

Los bosques amazónicos

La cuenca del Amazonas, que aporta alrededor de un quinto del agua dulce mundial, constituye la mayor concentración de bosques tropicales mundiales (en el caso de los bosques latifolios, el 35% del total mundial). Una característica destacable de la subregión es la enorme biodiversidad vegetal, más de 60.000 especies que constituyen un extraordinario reservorio de bienes y servicios para la creciente economía ecológica mundial (Cuadro 5).

Cuadro N° 5

Algunas magnitudes de la economía sostenible ecológica mundial

- Mercado de los productos naturales no maderables:
US\$ 60 billones anuales
- Extractos vegetales medicinales: US\$ 16.5 billones
- Drogas provenientes de plantas: US\$ 30 millones.
- Turismo basado en el entorno natural:
US\$ 260 billones anuales
- Captura y reducción de gases efecto invernadero (GEI):
US\$ 33 billones.

Fuente: OTCA, 2003. Elaboración propia

Se debe recordar que la cuestión del mantenimiento de la cubierta boscosa y por lo tanto de la bienes y servicios de la biodiversidad local, ha sido un asunto que ha ocupado la atención de países amazónicos desde la década pasada de los 90' cuando planteaban en el marco del TCA (hoy OTCA):

“(…)una compensación efectiva de los servicios prestados por la Amazonía, ajustada plenamente al valor de mercado y que tome en cuenta los costos de oportunidad para los países amazónicos. Deben movilizarse hacia la Amazonía donaciones y fondos altamente concesionales, con el objeto de romper la inercia causada por la crisis económica y remover el desarrollo sustentable” (TCA, 2000:13).

Turismo alternativo

América Latina y El Caribe cuenta con los atractivos y facilidades para el agroturismo, ecoturismo, turismo científico, turismo de aventura, turismo cultural, distribuidos en sus diversos ámbitos geográficos considerados como destinos turísticos: Amazonas, Caribe, Andes, Istmo Centroamericano, Cuenca del Plata, Llanos, Cerrado, Gran Pantanal, Pampas, Baja California, Galápagos, Tierra del Fuego, El Chaco, entre los más conocidos. Estas diversas opciones turísticas tienen importante significación para la sostenibilidad ya que además de procurar reducir ex ante los impactos negativos sobre el medio natural y la sociedad, ex post contribuyen al aprovechamiento sostenible local al:

- Generar beneficios económicos para las comunidades organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas,
- Ofrecer oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales,
- Incrementar la concienciación sobre conservación de los activos naturales y culturales, tanto entre la población residente como entre los turistas.¹

Los principales mecanismos internacionales de negociación para atender el cambio climático: América Latina y El Caribe aun buscando el consenso necesario

Los gobiernos de los distintos países de la región han venido participando en las diferentes Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP). Sobre todo desde la N° 14 realizada en Bali, se han venido planteando la adopción

de diferentes mecanismos de atención al cambio climático. Sin embargo no se ha logrado un consenso, evidenciándose contrariamente diferencias y controversias internas alrededor de algunas iniciativas, como a continuación se muestra:

Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)

El Protocolo de Kioto estableció los MDL para ayudar a los países industrializados a cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones y contribuir al desarrollo sustentable de los países en desarrollo (Miralles, 2011). Hasta ahora solamente se han permitido las actividades de forestación y reforestación. Se plantea la incorporación de otras opciones como las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. La vinculación de estas iniciativas a la lógica de mercado ha venido marcando, desde la ya referida COP 14, diferencias en la región. Por un lado aparecen los países de apoyo abierto como Colombia, Chile y Perú y el bloque CARICOM. Argentina también los apoya pero con la regulación del Estado para evitar afectar la competitividad internacional de ese país (PCL, 2010). Los países de ALBA, por su parte, han venido rechazando los MDL por considerar que se trata de prácticas capitalistas (De Lisio, 2014).

REDD+

La Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) de Bosques, fue presentada por primera vez en la COP de Bali, sin embargo fue en la COP 16 de Cancún donde se le dio el carácter de mecanismo central de colaboración de los países en desarrollo en el compromiso del cambio climático. Estos recibirían pagos compensatorios por mantener sus bosques en pie. En América Latina hay un consenso casi unánime entre los gobiernos de región alrededor de este mecanismo. Solo Cuba y Venezuela no reportan proyectos REDD+ (GCP, 2008; García, 2011). Hay que recalcar igualmente que muchas organizaciones de la sociedad civil han venido cuestionando este mecanismo porque cuando se aplica en tierras privadas, puede propiciar la mercantilización de los servicios ambientales, situación que se evitaría, sin embargo, en el caso de instrumentarse en tierras públicas.

Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropriadas (NAMA en inglés)

En la COP 14 de Bali se anunció por primera vez este instrumento, aún en construcción, que en esencia plantea la reducción Medible, Reportable y Verificable (MRV) bajo seguimiento internacional de las emisiones. A pesar de algunas críticas sobre una supuesta pérdida de soberanía, en general hay un acuerdo en la región para aceptar los NAMA en la medida en que se reciban fondos adicionales a los ya comprometidos en otras iniciativas (Honty, 2011).

Propuestas regionales frente al cambio climático. Una oportunidad para la integración alternativa regional

Las potencialidades de aprovechamiento y mecanismos de descarbonización de la economía –imprescindibles para lograr estabilizar las condiciones atmosféricas– considerados, permiten identificar las posibilidades como región para transitar hacia el desarrollo sustentable, superando el esquema BAU que tantos conflictos socio-ambientales ha producido. Especialmente en la encrucijada climática en la que nos encontramos, los gobiernos de la región deben dejar atrás las políticas de incentivo a las actividades reprimarizantes del sector agrícola y extractivo minero-energético, en las que no se ha tenido en cuenta los pronósticos de las consecuencias socio-económicas del cambio climático que está afectando la región en las últimas décadas.

Esta combinación de potencialidades y problemas comunes abre la oportunidad para emprender nuevas estrategias de integración que partan de premisas como las que continuación se consideran:

- Frente a problemas u oportunidades compartidas entre países, hay que buscar respuestas de solución o aprovechamiento comunes.
- Países que comparten un mismo ámbito geográfico podrían tener resultados opuestos de ganancias y pérdidas por cambio climático, con probabilidad de derivar en conflictos sociales.

Tanto para la optimización de respuestas regionales como para el desescalamiento preventivo de los conflictos socio-climáticos latentes, se requiere de una visión que vaya más allá de los límites de los estados, tratando de lograr las repuestas compartidas, teniendo presente la compensación de las desigualdades nacionales y subnacionales que podría acarrear el cambio climático.

A continuación se presentan algunas propuestas de políticas para atender el reto del cambio climático en esta perspectiva de región que se ha tratado de esbozar:

1. Ecologización de las economías suramericanas y la cooperación regional para la potenciación de las localidades sustentables

El mundo tiende a avanzar hacia la descarbonización económica. Los países suramericanos, por ejemplo, podrían verse particularmente afectados en la aplicación de estándares establecidos en la serie ISO 14.000², en sectores como: hierro y acero, aluminio, papel, cemento, químicos y otras industrias productoras de bienes utilizados en construcción (por ejemplo cal, vidrio, etc.) Entre 1990 y 2003 se triplicó el volumen exportado de los bienes producidos comprometidos por la aplicación de estas regulaciones (Aguilar *et al*, 2009). En general toda la producción que se consideró básica y estratégica, intensiva en energía e insumos químicos, la que identificaban los sectores promisorios para el desarrollo industrial “duro” en la región durante el siglo XX—incluyendo la agroindustria que se trata particularmente más adelante—requieren ser reevaluados en este siglo XXI signado por el cambio climático. Si bien en algunos de estos sectores, como el hierro y el acero en los principales países productores, Venezuela y Brasil, la hidroelectricidad es la fuente de energía de soporte del proceso industrial, ésta cuando se desarrolla bajo la modalidad de megarepresas como Guri e Itaipú está asociada a la generación de impactos ambientales sancionables en el marco de las regulaciones ISO 14.000 que trascienden el aspecto exclusivo de las emisiones GEI. De tal manera que se plantea una verdadera reingeniería económica para ecologizar las economías nacionales bajo una óptica de complementariedades regionales sustentables que podrían abrir el paso a nuevas experiencias de cooperación e integración que permitan superar las percepciones negativas en las áreas de fronteras como se consideró en la sección anterior.

Este proceso de integración alternativo, que hace unos años se planteaba como una necesidad, hoy se convierte en una exigencia al considerar esa especie de proteccionismo verde que empieza a vislumbrarse en el bloque de los países industriales. Especialmente en Europa y Estados Unidos, principales destinos de las exportaciones latinoamericanas y caribeñas, se vienen adelantando la implementación de medidas como el Sistema de Mercado de Emisiones y las Regulaciones de Fronteras, entre otras que implican el control de mercado de las emisiones GEI tanto en la fase de producción como de transporte y consumo. Esto implicaría redefinir los sectores competitivos del sector externo de países como Argentina, Brasil, Venezuela, y en menor proporción, Colombia y Perú. En general se recomienda empezar a evaluar una estructura arancelaria regional –atendiendo a la experiencia acumulada en Mercosur y CAN– que promueva los productos con mayor VCR regional en la cada vez más enverdecida economía mundial. También esta revisión podría considerar la reciprocidad en las exigencia ambientales de los productos que se importan, recordando que los Estados Unidos, un país con problemas de carbonización de su economía, sigue siendo el principal origen de las importaciones a la región.

Este debería ser, por ejemplo, uno de los temas de una agenda ambiental de UNASUR y CELAC, que permita potenciar las localidades con ventajas para la producción sostenible ecológicamente respetuosa y socialmente incluyente. Se requiere revalorizar no solo a la naturaleza, sino también las diversas modalidades de capital intangible local (Boissier, 2007), algunas de las cuales precisamos en las estrategias particulares siguientes.

2. Sinergias propias contra la deforestación y la agricultura insostenible

La región sobresale como receptor principal de proyectos MDL. Hay una tradición en la participación regional de Fondos de Financiamiento internacionales tales como: World Bank Carbon Finance, Prototype Carbon Fund (PCF), Netherlands Clean Development Facility (NCDF), Community Development Carbon Fund (CDCF), entre otros. Es tal la relevancia que hasta se han logrado crear Fondos regionales propios como: el Programa Latinoamericano de Carbono (PLAC), de CAF y Alianza CAEMA – Natsource. En el campo de las relaciones bilaterales han sido particularmente activo países como

Canadá y Holanda con Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia. El Salvador, entre otros (García, 2011).

En este contexto, se debe evaluar con mayor detalle la posición de Bolivia en la COP 16. En la negativa boliviana de firmar el Acuerdo de Cancún, expresada por su embajador Pablo Solon, se aclara sin embargo que no se pone en entredicho la necesaria lucha contra la deforestación (recordemos que desde el 2008 Bolivia mantiene proyecto ONU-REDD), sino las prioridades económicas implícitas en el documento:

“(...) el financiamiento para los bosques no tiene que estar en función de cuánto captura un bosque, sino tiene que estar en función de cuánto necesitamos para preservar y proteger ese bosque, porque necesitamos planes de gestión para que esos bosques no se destruyan producto de incendios, producto de desmontes que tienen que ver con la necesidad de generación de fuentes de trabajo alternativo.”³

Esta posición podríamos considerarla coincidente con el Plan OTCA 2004-2012, en el que se plantea una visión amplia de las múltiples oportunidades de articular un sector forestal bajo la estrategia de “aprovechamiento del bosque en pie” sosteniblemente promisorio no solamente en término de mercado alternativo, sino también en cuanto a la generación de empleo duradero. Las orientaciones del Plan están dirigidas además a superar el predominante carácter primario extractivista de la explotación forestal en la región, planteando la inclusión eco-socio-productiva a largo de toda la cadena de valor que va desde la recolección de los productos no maderables hasta la transformación de los insumos en los sectores “aguas abajo” agroalimentarios, manufacturero, farmacia, entre otros, que empiezan a adquirir un carácter relevante, a veces estratégico, en la economía mundial.

Para una solución realmente integral del problema de la deforestación, no se puede disociar su vínculo a la expansión de la agricultura insostenible –recordemos que algunos rubros agroindustriales como maíz, arroz y trigo, muestran pronósticos negativos en los distintos escenarios de cambio climático– por lo que en el espíritu del REDD+, se deben incluir la necesaria adopción de las prácticas de agricultura sostenibles, como las ya referidas andinas y centroamericanas. La históricamente comprobada viabilidad ecológica y social de estas

experiencias, hoy se ve particularmente complementada en lo económico en el marco de la globalización del etiquetado voluntario y de las regulaciones de la serie ISO 14.000. En esta propuesta de búsqueda de sinergias regionales para la silvicultura sostenible, se debe por lo menos considerar las ventajas de incluir la sugerencia que ha venido haciendo Colombia sobre la aceptación de los aportes privados y no solo gubernamentales, para alimentar los fondos de los países en desarrollo en materia de deforestación (PCL, 2009).

Para lograr llevar adelante esta propuesta se requiere articular acciones e iniciativas a distintos niveles: regional, subregional, nacional y subnacional, que se han venido acumulando a través de organismos como por ejemplo el IICA, CAF, CEPAL, de las iniciativas locales FAO, las experiencias de centros de investigación como CATIE.

3. Programas nacionales de formación y capacitación socio-ambiental

El cambio climático, además de la producción y las finanzas toca las restantes esferas de la economía y sociedad: trabajo, consumo, política, entre otros en los que se han detectado carencias de formación y capacitación que dificultarían la respuesta regional a los compromisos de adaptación sostenible y segura al cambio climático. En tal sentido, se plantea la formulación e implementación de planes entrenamiento y preparación para el trabajo digno, el consumo responsable, el liderazgo ecopolítico, el revalorización sostenible de las bases ecológicas, necesarios para sustentar los cambios en los protocolos de producción y consumo y, en general, de los estilos de vida en los distintos países de la región. Los programas deben estructurarse anclados en los alcances nacionales, sin embargo no por ello se debe perder de vista la diversidad del *genius loci* de las localidades, debiéndose apalancar procesos que potencien las ventajas socio-económicas y políticas locales donde existan y creando las condiciones para que estas surjan donde no se tengan. Por el otro, se debe tener siempre presente la necesaria articulación regional ya que el mundo global avanza bajo la lógica de bloques geográficos de intereses.

Para el arranque de estos programas con visión multidimensional regional, nacional y local, se puede contar con los aportes conceptuales, teóricos y técnicos como: la propuesta PNUMA-OIT (2008) de Empleo Verde, las orientaciones sobre el Consumo Responsable que comparten

diversas ONG, el Buen Vivir que el gobierno Ecuatoriano contempla como Plan Nacional 2009-2013⁴, la iniciativas para la capacitación para el liderazgo ecológico latinoamericano y caribeño que vienen impulsando centros regionales como CLAES y Fundaciones como FES. Los Programas pueden estar residenciados en las redes de Universidades regionales y subregionales como UDUAL, Grupo de Montevideo, UNAMAZ, sin perder de vista las instancias especializadas sectoriales como la Universidad de los Trabajadores (UTAL) adscrita a la OIT.

4. Red de centros de excelencia y pertinencia social para el cambio climático

El cambio climático es uno de los campos más dinámico de desarrollo científico-tecnológico en el mundo. América Latina debe dotarse de las instancias que puedan no solamente participar de la búsqueda, generación y experimentación de opciones, sino que además sean capaces de difundirlas actualizadamente entre la población en su conjunto. En este sentido, y en el marco de las resoluciones de Reunión de Trabajo del Belmont Forum realizada en París (8-9/06/11)⁵ en la que participaron actores regionales como CLACSO, Asociación Latinoamericana de Cuentas Patrimoniales (ALCUPA), Direcciones Regionales varias de UNESCO entre otros, se requiere de Centros que combinen la excelencia en la investigación tanto para el estudio, diagnóstico, seguimiento y evaluación con la pertinencia social, entendiendo que el conocimiento que se produce debe ser conocido y apropiado por las sociedades. Se proponen centros necesariamente interdisciplinarios en los que converjan, bajo programas y metas precisas de investigación/acción para la adecuación sustentable y segura al cambio climático regional, los distintos profesionales de diferentes disciplinas –se parte del principio de que todas son necesarias a diferentes niveles– que comprendan que las situaciones complejas a atender obligan a superar los límites de la ciencia normal positivista. Para una red como esta se cuenta con experiencias como las del CATIE, la Fundación Bariloche, FLACSO en los que se ha venido atendiendo el asunto del cambio climático regional.

5. Observatorio prevención de de conflictos socio-climáticos

Como se vio en el diagnóstico de la situación actual, la cifra de damnificados por las lluvias y las emigraciones por sequía en América Latina y el Caribe, ha venido aumentando. Se han producido

importantes desplazamientos migratorios producto especialmente de la desertificación, sin embargo ante los pronósticos de países que tienden a beneficiarse y otros a perjudicarse por el cambio climático se deben prever las migraciones más allá de las fronteras. De la misma manera, en los países que comparten más de un ámbito subregional, puede incrementarse el problema de los desplazados climáticos. En general se debe manejar un escenario de aumento del conflicto social al interior y al exterior de las fronteras nacionales, que sustenta la propuesta de este Observatorio. La misma se nutriría de las experiencias que en temas conexos se ha venido adquiriendo en la región, debiéndose destacar como ejemplo la labor de ACNUR-ONU en el tema de los refugiados y desplazados, y el trabajo de Redes como CRIES y PATNERS en Talleres de Resolución de Conflictos socio-ambientales.

6. Red regional de ciudades y cambio climático

América Latina y El Caribe tienden a un perfil demográfico territorial cada vez más urbano. Paraguay, el país menos urbanizado, presenta una tasa de población urbana cercana al 60% del total. Además se debe señalar que la gran mayoría de las principales concentraciones humanas se localizan en la zona litoral, convirtiéndose en lugares de alta vulnerabilidad climática. Sin embargo, es también a nivel del municipio donde se pueden concretar acciones frente al cambio climático: como el fomento del uso del transporte público y de medios alternativos de movilidad ciudadana, el ahorro energético, la reducción de las “islas” de calor urbano, la reforestación, la protección de los cursos y cuerpo de agua, el resguardo de las zonas litorales y cuerpos de agua, la alerta epidemiológica, la adecuación de los sistemas de las aguas servidas, la recuperación y control de las aguas de lluvia, los planes de zonificación del riesgo, entre otras.

En la región hay diferentes ciudades que han avanzado en estas iniciativas de adaptación y reducción de las vulnerabilidades frente al cambio climático, mediante programas que implican una visión metropolitana de mediano y largo plazo; en especial se debe destacar: el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020, Plan de Distrital de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de Bogotá, Caracas 2020, entre otras. Para establecer posibles condicionantes de la propuesta se deben evaluar antecedentes como la Iniciativa de Aire Limpio en Ciudades de América Latina (IAL-CAL).

7. Creación de la Comisión para el Cambio Climático de América Latina y el Caribe (CCCALC)

El conjunto de propuestas realizadas requieren de una institucionalidad articuladora que potencie la concreción de las mismas. En este sentido, se propone la creación de la Comisión para el Cambio Climático de América Latina y el Caribe (CCCAL) en el marco de CELAC como instancia de ámbito regional, pero con posibilidades de asesoría y acompañamiento a nivel nacional y subnacional. Su estructura debe reflejar la diversidad de aspectos considerados: estudios y pronósticos climáticos, adaptación económica, social y territorial, cooperación regional, acciones de mitigación, comercio internacional, resolución de conflictos socio-climáticos, entre otros. Entre las medidas inmediatas debería considerarse la adecuación del contenido los mecanismos de integración subregionales y grupales existentes: Mercosur; CAN; OTCA; OEC; ALBA: SICA, a la multifactorialidad científica, ecológica, social, económica, territorial, demográfica que debe estar presente para lograr el marco regulatorio de las respuestas sostenibles y seguras al cambio climático regional. De igual manera debería impulsar los planes nacionales y subnacionales de adaptación al cambio climático. En su conformación debe auspiciar la co-gobernaza climática creando espacio de participación de la sociedad civil. De manera similar debe propiciar la participación del sector científico-técnico.

Situación a nivel país

De acuerdo al conocimiento e interés que han mostrado los países en los distintos temas que se atienden en la tabla a continuación, se estiman los niveles de incidencia potencial de cada uno de ellos en las distintas propuestas arriba planteadas:

Cuadro N° 6
Nivel potencial de incidencia nacional en las propuestas regionales

País /Propuesta	1	2	3	4	5	6	7
Argentina	A	M	A	A	A	A	A
Bolivia	B	A	B	M	M	B	B
Brasil	A	M	A	A	A	A	A
Chile	M	M	M	M	M	M	B
Colombia	M	A	A	M	M	A	B
Costa Rica	B	A	A	A	M	B	B
Cuba	B	M	M	A	B	M	M
Ecuador	M	A	B	M	M	M	B
El Salvador	B	A	B	B	B	B	B
Guatemala	B	A	B	B	B	B	B
Honduras	B	B	B	B	B	B	B
México	A	A	A	A	A	A	M
Nicaragua	B	M	B	B	B	B	B
Panamá	B	M	M	M	B	B	B
Paraguay	B	B	B	B	M	B	B
Perú	M	M	B	M	M	M	M
República Dominicana	B	B	M	M	M	B	M
Uruguay	B	M	A	M	M	B	M
Venezuela	A	B	M	M	M	M	A

Elaboración propia: Nota: A: Alto M: Medio B: Bajo

De las estimaciones realizadas atendiendo a la capacidad política e institucional de cada país de incidir en las propuestas regionales, se puede diferenciar cuatro grupos de países:

- 1) Los que muestran un nivel de incidencia predominantemente Alto: Argentina, Brasil México.
- 2) Los que muestran un nivel potencial de incidencia Medio Alto: Colombia, Costa Rica, Uruguay, Venezuela.

- 3) Los que muestran un nivel de incidencia predominantemente Medio y Medio-Bajo: Bolivia, Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Panamá, República Dominicana.
- 4) Los que muestran un nivel de incidencia predominantemente Bajo: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay.

De tal manera que, en primera instancia, Argentina, Brasil y México tendrían las mayores responsabilidades en el impulso de adaptación regional al cambio climático. Sin embargo no por ello debe dejar de reconocerse el papel de los restantes países, algunos de los cuales junto al trío de países mencionados, muestran importantes iniciativas nacionales de instrumentación de MDL, conformando un conjunto amalgamado de experiencias que podrían servir de “vitrinas” para el resto de la región, algunas de las cuales se recoge en el cuadro continuación.

Cuadro N° 7

Iniciativas Nacionales Resaltantes en desarrollo bajo en carbono

Argentina: Resalta el interés por la adaptación al cambio climático en las áreas costeras de la provincia de Buenos Aires.

Bolivia: Destaca el interés por la promoción de las técnicas agrícolas tradicionales.

Brasil: Su Plan Nacional de Acción para Cambio Climático prevé reducir la deforestación en un 72% para 2017, en este sentido debe destacarse la creación en 2007 del “Fundo Amazônia” con el objetivo de la captar recursos internacionales para estos fines. Este fondo tiene alcance subregional al prever que hasta un 20% de los recursos podrían dirigirse hacia los restantes países amazónicos interesados en reducir la deforestación en sus territorios. Finalmente, merece desatacarse la suscripción de un plan de acción conjunta entre la UE y Brasil a finales de diciembre 2008 en temas ambientales y cambio climático.

México: Adelanta iniciativas para la implementación de tecnologías ecológicas y eficaces, como la energía eólica y solar.

Colombia: es uno de los principales promotores de ampliación de fondos REDD.

Costa Rica: Es una de las economías más bajas de carbono de América Latina y se ha propuesto llegar a la emisión cero de carbono para 2021 mediante la promoción de su programa nacional de “Paz con la Naturaleza”. Este país cumple un papel preponderante, junto con Papua Nueva Guinea, en la coalición de países con cobertura forestal importante.

Cuba: Desempeña un papel de liderazgo en el manejo de información climática para la preparación ante emergencias en el Caribe y Centroamérica, y ha implementado acciones de adaptación y mitigación, particularmente en el sector forestal y de conservación del agua.

Chile: Adelanta un Plan Nacional que implica la creación de un fondo nacional para biodiversidad y cambio climático, la creación de dos consorcios de investigación en relación a los biocombustibles de segunda generación y el fortalecimiento de los MDL como herramienta para el desarrollo sostenible y la transferencia de tecnologías.

Panamá: Incluyó acciones de cambio climático tanto en su programa nacional como en los trabajos de extensión del canal de Panamá.

Perú: Participa en la promoción de las técnicas agrícolas tradicionales atendiendo su relevancia en el mercado global alternativo y las normas ISO 14.000.

Uruguay: es uno de los países con menos emisión de gases de carbono gracias a los resultados positivos de mitigación de una política de reforestación a largo plazo.

Elaboración propia a partir de fuentes varias

En este listado de países con iniciativas resaltantes preocupa la ausencia de Venezuela, dada su incidencia en la política regional y su condición de exportadores netos de GEI (exportación con mayor contenido de CO₂ que sus importaciones). A diferencia Argentina, Brasil y México, que también entran en este grupo de economías de alto impacto y que tienen un rol regional relevante, pocas o nulas son las iniciativas de Venezuela, que muestra un nivel de incidencia medio-alto para avanzar hacia una economía regional más enverdecida.

A manera de colofón: La gobernanza ambiental como catalizador de la integración alternativa

El problema del desarrollo latinoamericano sigue sin desenlace claro en cuanto a su deuda ecológica y social, sin embargo, a partir de los años noventa aparece la sociedad civil en el debate, tratando de propiciar la búsqueda de alternativas que necesariamente deben ser de carácter multidimensional y multifactorial. De los esfuerzos desde “abajo” emergen acciones especialmente dirigidas a la gobernanza, la que involucra a organizaciones de la sociedad civil en el acompañamiento de las Cumbres de Las Américas, en el marco de la OEA. Con ello se le ha dado una importante apertura a la participación de la sociedad civil, dejando de ser un foro exclusivo de gobiernos. En el cuadro a continuación se recogen un conjunto de recomendaciones que reflejan la potencia de sentido y la capacidad catalizadora de la participación ciudadana en el marco del OEA.

Cuadro N° 8

Recomendaciones para Fortalecer la Participación Ciudadana en la Política Local

- Crear nuevos espacios de participación ciudadana para el diagnóstico, formulación de políticas y adopción de decisiones, tales como: consejos consultivos, presupuestos participativos, encuestas deliberativas, jurados ciudadanos, teledemocracia local o Gobierno Electrónico.
- Generar mecanismos para un mayor control ciudadano y rendición de cuentas de las autoridades, tales como: derecho de petición a la autoridad, acción de cumplimiento de leyes y actos administrativos, veedurías ciudadanas, cuentas públicas, publicación de auditorías, portales web con información de la gestión y uso de recursos públicos, compras y contratos públicos, personal de planta, declaración de patrimonio de políticos, autoridades y altos funcionarios públicos. Fortalecer el diálogo y la concertación social para el desarrollo regional-local.
- Poner en operación diversas instancias público-privadas para el diálogo y la concertación de acciones de desarrollo entre los Gobiernos subnacionales y las organizaciones de la sociedad, tales como foros, corporaciones, agencias de desarrollo o consejos económico-sociales. Conseguir convenir con las universidades regionales el desarrollo de estudios y encuentros que fortalezcan el diálogo social de sus territorios. Funcionamiento en la práctica de los diversos instrumentos institucionalizados en el ámbito nacional para la participación.
- Propiciar mecanismos consultivos (veedurías, cabildos, asambleas de ciudadanos, referendos consultivos, entre otros).
- Promover mecanismos vinculantes (referendos aprobatorios, revocatorios, entre otros).
- Aplicar otros mecanismos (seguimiento de políticas públicas, participación en comités de postulaciones de autoridades, iniciativas ciudadanas legislativas, contraloría social, decisiones presupuestarias).
- Sistematizar e informar sobre organizaciones de derechos de las mujeres que participaron en diferentes mecanismos listados.
- Mantener e informar sobre la lista de organizaciones de derechos de las mujeres que lideraron la utilización de mecanismos.

Fuente: *Red Democracia Activa, Participa, Invesp* (2008:56)

La organizaciones sociales en este escenario han desplegado una estrategia de acción proactiva en la búsqueda de co-gobernanza social, enfatizando en los aspectos críticos de seguimiento y control de la democracia que mira más allá de lo electoral (Rossanvallon, 2007). Por ello se insiste en los mecanismos de acompañamiento ciudadano, virtuales y presenciales que desde el plano local le dan contenido cotidiano al ejercicio democrático.

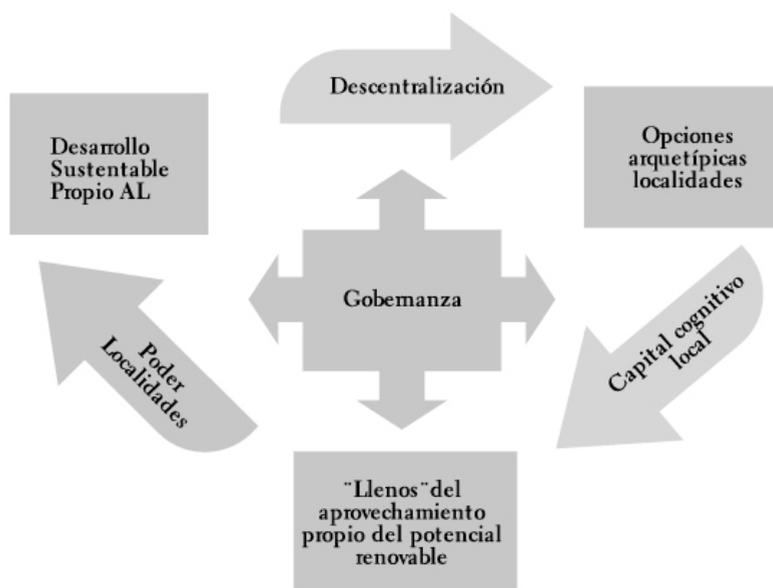
En una perspectiva histórica, potenciar la actitud democrática del ciudadano en su día a día podría servir de factor catalizador para romper con la inercia histórica de una cultura centralista de gobierno resultado, de acuerdo a Boisier (2004, 2007), de las ausencias de cambios como los que implicaron en Europa: la Revolución Industrial en el terreno social, la Revolución Francesa en el campo político, la Reforma en el ámbito religioso, el Feudalismo en la descentralización territorial.

La participación de la sociedad civil, en el debate sobre el desarrollo latinoamericano es necesario para lograr un espacio público de discusión y acción alternativo para que el desarrollo latinoamericano deje de ser un problema exclusivo de las élites político-técnicas, y se convierta en una “idea fuerza” de la gente que se organiza para conquistar, defender y/o ampliar sus derechos políticos, económicos, sociales, ecológicos.

Los gobiernos nacionales y los organismos regionales y subregionales deberían abrirse a las exigencias de la sociedad, tanto si se trata de los grupos indígenas y campesinos que luchan por la defensa de sus territorios y formas de vida como de las redes y movimientos más urbanos cuya lógica de acción va más dirigida a la ampliación de sus bases organizacionales, y mayor injerencia en el seguimiento y control de las acciones de gobierno, abriendo paso a la gobernanza.

En la figura a continuación se bosquejan los encadenamientos virtuosos que se están planteando.

Figura 1
La Gobernanza como catalizadora de la integración alternativa



Fuente: *Elaboración propia.*

La gobernanza así vista va más allá del mero hecho de la participación y acompañamiento que convencionalmente se plantea. Está especialmente vinculada a la descentralización entendida como proceso que introduce la necesaria viabilidad política-técnica para aprovechar el conjunto de oportunidades que han sido subestimadas en los proyectos nacionales que buscan la integración regional, intentos que no consideran la diversidad local que el centralismo invisibiliza, simplificando la visión a nivel de país.

El reconocimiento de las fortalezas y debilidades particulares de los lugares, sin embargo tampoco son suficientes por sí solos, y requieren de la posibilidades de lograr mediante el conocimiento propio, del capital cognitivo local, de incorporarlos a propuestas de desarrollo dirigidas a “llenar los vacíos” que el desarrollo insostenible genera, al no incorporar como parte de los activos como los servicios ambientales, los conocimientos tradicionales, las prácticas seculares de agricultura sostenible, las formas de asociatividad para el trabajo y cooperación

que desbordan la lógica del mercado y de la generación de la plusvalía, solo para mencionar algunos de los contenidos que pueden llenar esos “vanos”.

En la medida en que se logre la concurrencia de las reivindicaciones de la sociedad por lograr la participación activa y determinante en la conducción de las políticas de las que dependen sus formas y niveles de vida, con del proceso político-institucional de la descentralización y el aprovechamiento propio del potencial de aprovechamiento sostenible, sustentado en el capital arquetípico que subyace en las reservas cognitivas de las comunidades, se estaría logrando superar la situación de enajenación socio-territorial que mantiene postradas reactivamente a las localidades frente al estadocentrismo (Lander, 2014). Se requiere superar esta visión centrada en el Estado Nación en América Latina y El Caribe, si se quiere pasar de la integración por arriba entre gobiernos circunstanciales, y pasar a un plano más subyacente y unir pueblos y culturas, de poner a la gente por encima del mercado, la que potencia la apropiación originaria de los recursos frente a la enajenación que favorece a los intereses de las grandes empresas nacionales y transnacionales que compiten en el uso de recursos naturales que en muchos casos son el único patrimonio intergeneracional, es decir sostenible, duradero, que disponen las muchas comunidades, ante la ausencia de procesos que garanticen la acumulación endógena de capital económico, como punto de apalancamiento del Desarrollo propio Regional.

Como comentario final, es de destacar que este cambio de orientación, privilegiando la participación y co-responsabilidad de la sociedad civil en las decisiones que tienen que ver sobre sus condiciones de vida y la ejecución de propuestas para garantizarlas, obliga a un remozamiento de la integración regional latinoamericana y caribeña. Se requiere ir mucho más allá de las buenas prácticas e intenciones –se han señalado en el caso por ejemplo de OEA, Mercosur, OTCA, de incidencia muy puntual–, y por supuesto lograr darle carta de ciudadanía a la gobernanza ambiental, especialmente en los nuevos intentos post-liberales, como CELAC, UNASUR, ALBA (Serbin et al, 2012). Estos mecanismos que surgieron en la década pasada, cuando tanto el desarrollo sostenible como la amenaza climática se convirtieron en temas relevantes de la agenda internacional, paradójicamente están

imbuidos en la lógica BAU, mixtificando el progreso basado en los viejos sectores extractivos, especialmente minero-petroleros (CELAC, 2013, CEPAL, 2013, UNASUR, 2013, FAO, 2013, De Lisio, 2013b). En la medida en que se siga en esta anacrónica visión, se subestima y desvaloriza los potenciales para el desarrollo sustentable regional considerados, que al ofrecer ventajas comparativas para la región en su conjunto, potencian las oportunidades comunes de economía ecológica y propician la compensación de las posibles asimetrías nacionales y subnacionales por efecto del cambio climático.

NOTAS

1. Disponible en: www.cinu.org.mx/eventos/turismo2002 (Consultado el 20-03-16).
2. Particularmente las referidas al ciclo de vida de los productos (ISO 14040), niveles de emisión de GEI (ISO14064) y reducción o eliminación de GEI (ISO 14065).
3. Disponible en: <http://cmpcc.org/2010/12/11/discurso-de-bolivia-en-cancun-10-diciembre-2010/> (Consultado el 10-10-11).
4. Disponible en: http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/plan_nacional_para_el_buen_vivir_200920 (Consultado el 12-10-11).
5. Disponible en: www.worldsocialscience.org/.../ISSC-BF_Workshop

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar S., Bouzas R., Molinari A. (2009). "Mitigación del cambio climático y comercio internacional: algunas implicaciones para América Latina". *International Institute for Sustainable Development Reporting Services*. Buenos Aires: Universidad San Andrés.
- BID, PNUD (1992). *Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Nuestra Propia Agenda*. Washington: BID/PNUD.

- Boisier, S. (2007). “América Latina en un medio Siglo (1950/2000): el desarrollo, ¿dónde estuvo?”, en *Observatorio Iberoamericano del desarrollo local y la economía social*, Grupo EUMED.NET de la Universidad de Málaga, Málaga, Año 1, Nro. 1, Julio-septiembre de 2007, pp. 3–41.
- Boisier, S. (2004). “Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente”, en *Revista eure*, Santiago de Chile: Vol. XXX, N° 90, pp. 27-40.
- CEADESC (2011). *Atlas de Megaproyectos de Infraestructura en Bolivia*. Bolivia: Editorial El País.
- CELAC (2013). “Declaración de Santiago”, *I Cumbre CELAC*, Santiago de Chile.
- CEPAL (2013). *Recursos Naturales en UNASUR. Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional*. Santiago de Chile.
- CEPAL/GTZ (2004). *Fuentes de Energías Renovables América Latina y El Caribe. Situación y Propuestas de Políticas*.
- Conservación Internacional Fundación Amigos del Museo Noel Kempff: (2007). *Estudio de la Deforestación histórica total en la Amazonía en los nueve corredores*. La Paz.
- Europa AID (2009). *Cambio Climático en América Latina U.E.* Bélgica: Les Isnes.
- García B. (2011). *Local governance, anti-corruption and REDD+ in Latin America and the Caribbean: exploring synergies to strengthen transparency and accountability*. Panamá: UNDP.
- GCP (2008). *The little Red Handbook A guide to governmental and non-governmental proposals for reducing emissions from deforestation and degradation*. Oxford: Global Canopy Programme.
- De Lisio A. (2013a). *La IIRSA o la Integración Física Suramericana como dilema eco-sociopolítico*. Buenos Aires: CLACSO.
- De Lisio A. (2013b). *Desarrollo Sustentable e Integración Regional*. Caracas: ILDIS.
- De Lisio A. (2014). “Desarrollo Sostenible/Cambio Climático/IIRSA: Elementos de ecología política en América Latina y El Caribe”. Working Papers ENGOV UE-CLACSO.
- De Lisio A. “Trabajo final Beca CLACSO-ASDI Nuevos escenarios de la Integración Regional”. Buenos Aires (mimeo).

- De Lisio A. (2011). “Las amenazas naturales regionales: catalizadores de cambios estructurales en América Latina y El Caribe, en *Nuevo Mundo*, N° 5, Año III, USB, Caracas, pp. 135-164.
- Dourojeanni M. (2006). “Estudio de caso sobre la carretera Interoceánica en la amazonía sur del Perú”. Washington: Bank Information Center.
- FAO, Committee on Food Security Alba-TCP. 19-10-2012 Disponible en: www.fao.org (último acceso: 10-06-2013).
- Honty G. (2011). *Cambio climático: Negociaciones y consecuencias para América Latina*. Montevideo: Ed. Coscoroba.
- IPCC (2007). “Informe especial del IPCC impactos regionales del cambio climático: evaluación de la vulnerabilidad”. Resumen para responsables de políticas. BM.
- Karlik, J. (1967). “The long-range potential of Latin America: A year 2000”. Ideology the Hudson.
- Lander E. (2014). “El Neoextractivismo como modelo de desarrollo en América Latina y sus contradicciones”, en *(Neo)Extractivismo y el Futuro de la Democracia en América Latina: Diagnóstico y Retos*. Berlín 13-14 de mayo 2014, Heinrich BöllStiftung.
- López, R. (2009). *Acerca de los impactos del cambio climático en Sudamérica*. La Paz: IPDRS.
- Llosa J., Pajares E., Toro O. (2009). *Cambio climático, crisis del agua y adaptación en las montañas andinas. Reflexión, denuncia y propuesta desde los Andes*. Lima: Red Ambiental Peruana.
- Ministerio del Ambiente (MINAM) Peru (2009). *Causas y medidas de mitigación a la deforestación en áreas críticas de la amazonía peruana y a la emisión de gases de efecto invernadero*. Lima.
- Miralles, F. (coord.) (2011). “Cancún COP-16, Diálogo Regional de Política de América Latina y el Caribe Retos y oportunidades en Adaptación al Cambio Climático en Materia de Agua: Elementos para una Agenda Regional”. CONAGUA: México.
- OTCA (2003). “Plan Estratégico 2004-2012”. Disponible en: www.otca.org.br (último acceso: 13-06-2014).

- PLC (2009). “Cambio Climático y COP 15: Reflexiones desde y para América Latina”. Bogotá: Fundación Futuro Latinoamericano.
- PNUMA-OIT (2008). “Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas emisiones de carbono”. México :PNUMA.
- Red democracia activa/Participa/Invesp (2009). “Las Cumbres no deben quedar en letra muerta Informe Hemisférico 2006 – 2008”. Disponible en: www.invesp.org. (última consulta 02-06-14).
- Rossanvallon P. (2007). *La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Buenos Aires: Manantial.
- Samaniego J. (coord.) (2009). *Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe: una reseña*. Santiago de Chile: CEPAL/GTZ.
- Serbin Andrés, Martínez Laneydi y Ramanzini Haroldo Júnior (coord.) (2012). “El regionalismo “post-liberal” en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. *Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe*. Buenos Aires: CRIES.
- Silveira, M.L. (2007). “Diferencias regionales en el territorio brasileño: perspectiva diacrónica y sincrónica”. *Scripta Nova revista electrónica de Geografía y Ciencias sociales*. Universidad de Barcelona. Vol. XI, núm. 244.
- Svampa Maristela (2013). “«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina” en *Nueva Sociedad* N° 244 Disponible en www.nuso.org Acceso 20-08-2016.
- UICN (2011). “Comprendiendo el rápido impacto del desarrollo de infraestructura en los andes tropicales del sur”. Quito.
- UNASUR (2013). Conferencia de Unión de Naciones Suramericanas sobre Recursos Naturales para un Desarrollo Integral de la Región. Secretaría General UNASUR Quito.

RESUMEN

Cambio climático, desarrollo sostenible y gobernanza ambiental. Retos de la integración Latinoamericana-Caribeña

Este documento intenta abordar la apremiante cuestión del cambio climático en América Latina y el Caribe desde una perspectiva múltiple y compleja. Parte de una consideración del balance de pérdidas económicas que los eventos extremos climáticos han generado en la región y de los pronósticos que se manejan a nivel de los distintos ámbitos subregionales y nacionales. Este preámbulo permite entrar a considerar el problema de la vigencia del desarrollo insostenible, anclado en la resistencia de las elites políticas y económicas de salir del Business as Usual (BAU), haciendo una especial evaluación de la Iniciativa de Integración Regional Suramericana (IIRSA). Sin embargo se debe destacar que no se trata solo de destacar los anacronismos de la concepción de crecimiento y progreso que sustentan estas posiciones y ejecuciones y los profundos desarreglos sociales y ambientales que propician, poniéndolas de espaldas a los acuerdos internacionales sobre cambio climático que los propios gobiernos regionales en su gran mayoría suscriben. Se ha querido también realizar un aporte propositivo, intentando identificar algunas potencialidades y mecanismos de implementación que se tendrían a la mano, si se logra la voluntad política para asumir la propuesta del desarrollo sostenible, económicamente viable, socialmente incluyente y ecológicamente pertinente. En este marco, que permite ver a la región en función de distintas alternativas de aprovechamiento duradero de los bienes y servicios de la naturaleza de su base territorial, se identifican y explican una serie de propuestas para responder a dificultades y oportunidades compartidas, identificando la incidencia que estas tendrían en los distintos países para estimar cuales de estos tendrían capacidad de liderazgo en la ruta sustentable regional. A manera de colofón se discute la importancia de la incorporación de la sociedad civil en estos esfuerzos, destacando la necesidad de propiciar la apertura de espacios para la gobernabilidad ambiental, inclusive en los mecanismos de integración regional, particularmente en aquellos surgidos en la década pasada, cuando el cambio climático y el desarrollo sustentable se consolidaron como temas de la agenda internacional. Se aspira que al otorgarle la relevancia que estos asuntos tienen para el devenir de las próximas décadas, se puedan, finalmente, lograr alcanzar posiciones comunes que permitan tanto fortalecer el reposicionamiento del bloque regional latinoamericano y caribeño, como reducir las asimetrías nacionales y subnacionales que dificultan la Integración.

ABSTRACT

Climate Change, Sustainable Development and Environmental Governance. Challenges posed by the Latin American-Caribbean Integration

The purpose of this paper is to address the pressing issue of Climate Change in Latin America and the Caribbean from a multiple and complex perspective. It is based on an analysis of the economic losses sustained in the region on account of extreme weather events and the forecasts managed at the different sub regional and national environments. This preamble allows us to consider the relevance of unsustainable development, anchored in the political and economic elites' reluctance to step away from Business as Usual (BAU). To such effect, the South American Regional Integration Initiative (IIRSA) is evaluated in detail. However, it should be noted that this is not just about highlighting the anachronism in the conception of growth and progress sustained by these positions and executions and the deep social and environmental disruptions they bring about, alienating them from the international agreements on Climate Change that most of these regional governments subscribe. This paper also intends to present a proposition, by trying to identify some potential scenarios and implementation mechanisms that could be considered if enough political will were gathered to accept the proposal of sustainable, economically viable, socially inclusive and environmentally prudent development. Within this framework, focus is placed on the region based on the different alternatives for a sustainable use of goods and services provided by territorial natural resources and a series of proposals are identified and explained to respond to shared difficulties and opportunities, exploring the impact that they may have in the different countries to understand which of them could play a leadership role in the path towards regional sustainability. Finally, the author discusses the importance of incorporating civil society in these efforts, underscoring the need to open up spaces for environmental governance, even within regional integration mechanisms, and particularly in those created last decade, when climate change and sustainable development were consolidated as important topics on the international agenda. The aim is that by giving these topics the relevance they deserve in the decades to come, we will finally be able to reach common positions that will strengthen the repositioning of the Latin American and Caribbean regional bloc, and will reduce national and sub national asymmetries that are a major constraint to integration.

SUMMARIO

Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Governança Ambiental. Desafios da Integração Latino-Americana-Caribenha

Este documento procura abordar a questão imperiosa da Mudança Climática na América Latina e no Caribe de uma perspectiva múltipla e complexa. Parte de uma consideração do balanço de perdas econômicas que os eventos climáticos extremos provocaram na região e dos prognósticos tratados nos diversos âmbitos sub-regionais e nacionais. Este preâmbulo nos leva a considerar o problema da vigência do desenvolvimento insustentável, ancorado na resistência das elites políticas e econômicas de sair do Business as Usual (BAU), fazendo uma especial avaliação da Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana (IIRSA). Contudo, cabe enfatizar que não se trata apenas de destacar os anacronismos da concepção de crescimento e progresso que sustentam estas posições, suas execuções e os profundos desajustes sociais e ambientais que provocam, pondo-as de costas aos acordos internacionais sobre Mudança Climática que os próprios governos regionais, em sua grande maioria, firmam. Pretende-se também realizar uma contribuição propositiva, tentando identificar algumas potencialidades e mecanismos de implementação que estariam à mão se for alcançada a vontade política para assumir a proposta do desenvolvimento sustentável, economicamente viável, socialmente inclusivo e ecologicamente pertinente. Neste contexto, que permite ver a região em função de diversas alternativas de aproveitamento duradouro dos bens e serviços da natureza de sua base territorial, uma série de propostas para responder às dificuldades e oportunidades compartilhadas é mencionada e explicada, identificando a incidência que estas teriam nos vários países para estimar quais destes teriam capacidade de liderança no caminho sustentável regional. À maneira de conclusão, discute-se a importância da incorporação da sociedade civil nestes esforços, destacando a necessidade de propiciar a abertura de espaços para a governabilidade ambiental, inclusive nos mecanismos de integração regional, particularmente naqueles surgidos na década passada, quando a Mudança Climática e o desenvolvimento sustentável se consolidaram como temas da agenda internacional. Ao conferir a relevância que estes assuntos têm para as próximas décadas, aspira-se que seja possível, finalmente, alcançar posições comuns que permitam tanto fortalecer o reposicionamento do bloco regional latino-americano e caribenho quanto reduzir as assimetrias nacionais e subnacionais que dificultam a Integração.